



Recopilación jurisprudencial

# ENMIENDA DEL PROCEDIMIENTO

IURISTaller  
24 de febrero de 2016

*Lic. Juan Pablo Gramajo Castro*

---

**Corte de Constitucionalidad**  
**Expediente 466-2002**  
**2 de enero de 2003**

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:466-2002-0000>

*La facultad de enmienda conferida a los jueces.* El artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, faculta a los jueces para enmendar el procedimiento, en cualquier estado de un proceso (salvo aquellos donde la decisión ya reviste autoridad de cosa juzgada, por razones de seguridad y certeza jurídicas), cuando se haya cometido error sustancial que vulnere derechos de cualquiera de las partes, entendiéndose que existe error sustancial “*cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso.*”. La doctrina legal invocada por el amparista, permite ver que la facultad de enmienda debe ser ejercitada de manera prudente “cuando sea evidente que se cometió el error” (sentencia de ocho de enero de mil novecientos noventa y ocho; Expediente 213-97; Gaceta 47); que para ejercitar tal error se requiere que el mismo sea esencialmente relevante, es decir “*que pueda incidir en violación de una garantía constitucional.*” (sentencia de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho; Expediente 697-97; Gaceta 47); y que lo que no puede afectar la enmienda son “*aquellas resoluciones que, aunque no pasen en autoridad de cosa juzgada, han puesto fin a la cuestión debatida.*” (sentencia de dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, Expediente 940-97; Gaceta 49).

**Corte de Constitucionalidad**  
**Expediente 213-97**  
**8 de enero de 1998**

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:213-97-0000>

...de conformidad con el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, los jueces tienen facultad de enmendar el procedimiento, en cualquier estado del proceso, cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. La enmienda en esta norma se concibe como una facultad del juzgador, es decir que la misma puede disponerse cuando luego del estudio de las actuaciones, el juez de conocimiento advierta que se incurrió en violación a derechos de alguna de las partes. De ello cabe interpretar que esa facultad de enmendar es discrecional del juzgador; sin embargo, dicha discrecionalidad no puede ser empleada de manera arbitraria sino prudente, pues de lo contrario se rompe el equilibrio



procesal, el cual, en el caso de estudio, está íntimamente ligado al hecho de que las partes pueden, en el momento en que el juez no advierta de oficio el error de que se trate, solicitar la enmienda de procedimiento, solicitud que debe analizarse en relación directa con las constancias procesales y, cuando sea evidente que se cometió error, debiera hacerse la enmienda respectiva. En el presente caso, como quedó expuesto, esta Corte advierte que la autoridad impugnada al denegar al amparista la solicitud de enmienda de procedimiento resuelta mediante el acto reclamado, hizo uso de la discrecionalidad que la ley le confiere, pero inadvirtiéndolo su error denegó su enmienda, que en tales circunstancias, era procedente. Congruente con lo anterior, es procedente el otorgamiento del amparo solicitado a efecto de restituir al postulante en la situación jurídica afectada, por lo que habiendo resuelto en ese sentido el tribunal de primer grado, debe confirmarse la sentencia apelada.

## **Corte de Constitucionalidad**

**Expediente 697-97**

**18 de marzo de 1998**

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:697-97-0000>

Sobre el particular es pertinente advertir que el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, que da a los jueces la facultad de enmendar el procedimiento del que estén conociendo, permite su uso si se aplica para corregir la comisión de error substancial y no cualquier error, esto es, que implique nulidad en cuanto afecte algo que, por esencia, le es propio, de manera tal que pueda incidir en violación de una garantía constitucional, como puede serlo el derecho de defensa a que se refiere el artículo 12 constitucional, como en este asunto se alega. Aplicado lo dicho al caso de autos es pertinente traer a examen disposiciones del Código de Comercio y del Código Procesal Civil y Mercantil; de aquél, los artículos 14, que reconoce personalidad jurídica a las sociedades mercantiles; 26, en cuanto expresa que la inscripción de una sociedad mercantil le da derecho exclusivo al uso de su razón social y de su denominación, que debe ser claramente distinguida de cualquier otra; y 334, que somete a toda sociedad mercantil a la obligación de registro. Por su parte, el Código Procesal Civil y Mercantil prescribe, en el artículo 44, que la persona jurídica, como lo son las sociedades mercantiles, litigarán por medio de sus representantes; y en el artículo 45, que la personería se acredita acompañando el título de representación y que, para su admisibilidad procesal, debe estar debidamente registrado en la oficina respectiva.

Son estas disposiciones las que muestran el equívoco en que, al igual que su tribunal a quo, incurrió el tribunal reclamado, porque el error detectado, aunque concomitante, no es esencial. En efecto, en el documento presentado se transcriben cláusulas de la escritura de inscripción de J.M. Modas, S.A., y parte de una resolución de su asamblea general designando representante; dicho documento fue sometido a la obligación de registro y, en la razón de éste, se menciona que se hizo la inscripción del representante de la denominada sociedad. Por aplicación, pues, de las normas precitadas, no es dubitativo que el documento trate de la inscripción de representante de la sociedad ejecutada y no de otra, aún cuando cierto es el error meramente concomitante que se aprecia en el acta, por la transcripción equivocada del número de registro que correspondió a la sociedad al inscribirse. De consiguiente, si el yerro señalado carece de la esencialidad que justifica la declaración de enmienda del procedimiento, su acogimiento como tal conduce a transgredir el derecho constitucional de defensa que denuncia la postulante, dado que se le impide hacer valer en juicio lo que estima adecuado para oponerse a la ejecución.



**Corte de Constitucionalidad****Expediente 940-97****16 de septiembre de 1998**<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:940-97-0000>

La facultad de enmendar el procedimiento, que el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial otorga a los jueces, está limitada a que en el proceso se den los supuestos establecidos en la norma y a que el auto que la decreta cumpla con hacer los pronunciamientos que la misma regula. El artículo en mención preceptúa que, en cualquier estado del proceso, cuando se haya cometido error substancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes, los jueces tienen la facultad de enmendar el procedimiento. Los errores a que se refiere la citada disposición pueden ser de fondo o meramente procedimentales. Hay error de fondo cuando al dictarse una resolución se aplica indebidamente una norma, o bien se omite su aplicación. Además de las limitaciones señaladas, la enmienda del procedimiento, por implicar la revocación de actuaciones, no puede afectar aquellas resoluciones que, aunque no pasen en autoridad de cosa juzgada, han puesto fin a la cuestión debatida, tal el caso de los autos y las sentencias (artículo 144 de la Ley del Organismo Judicial).

De lo analizado anteriormente se advierte que el juez de primer grado decretó la enmienda del procedimiento con base en los documentos que se adjuntaron a la solicitud respectiva, según los cuales el trabajador reinstalado no tenía la calidad de tal. Como se ve, la causa del pronunciamiento no está comprendida en el artículo 67 citado, pues la declaratoria de reinstalación no estuvo precedida de actos procedimentales anómalos, ni se aplicó leyes indebidas u omitió aplicar normas pertinentes; al contrario, lo que generó la enmienda fue el ingreso al proceso de nuevos elementos que se incorporaron cuando ya no había oportunidad para rebatirlos. Por ese motivo, esta Corte considera que la enmienda decretada no tiene sustento legal.

Es importante, además, analizar que el Juez de Trabajo decretó la enmienda cuando el auto que resolvió el incidente de reinstalación ya estaba firme. El hecho de que la apelación interpuesta contra éste no se haya conocido porque la Sala sustentó el criterio de no ser apelable, en nada cambia su firmeza, pues contra esta denegatoria no se reclamó. De consiguiente, se concluye que se decretó la enmienda de un proceso fenecido y se dejó sin valor una resolución firme que no puede ser revocada a tenor del artículo 144 ibíd.

En conclusión, la autoridad impugnada al confirmar la enmienda del procedimiento violó el debido proceso, por lo que debe estimarse el amparo interpuesto, y, para el efecto, revocarse la sentencia venida en grado, sin condenar en costas a la autoridad impugnada por considerarse buena fe en su actuación.

**Corte de Constitucionalidad****Expediente 2556-2006****5 de julio de 2007**<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:2556-2006-0000>

Para situar la ratio de la decisión que se asume en este fallo, esta Corte considera pertinente determinar lo siguiente:

**A.** Constituye doctrina legal de este tribunal que *"de conformidad con el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, los jueces tienen facultad de enmendar el procedimiento, en cualquier"*





*estado del proceso, cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. La enmienda en esta norma se concibe como una facultad del juzgador, es decir que la misma puede disponerse cuando luego del estudio de las actuaciones, el juez de conocimiento advierta que se incurrió en violación a derechos de alguna de las partes. De ello cabe interpretar que esa facultad de enmendar es discrecional del juzgador, sin embargo, dicha discrecionalidad no puede ser empleada de manera arbitraria sino prudente, pues de lo contrario se rompe el equilibrio procesal, el cual, en el caso de estudio, está íntimamente ligado al hecho de que las partes pueden, en el momento en que el juez no advierta de oficio el error de que se trate, solicitar **la enmienda de procedimiento**, solicitud que debe **analizarse en relación directa con las constancias procesales y, cuando sea evidente que se cometió error, debiera hacerse la enmienda respectiva**"* (Sentencia de ocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, Expediente 213-97; Gaceta 47, página 147, cuyo tenor es reiterado en la sentencias de dieciséis de abril de dos mil dos, dictada en el Expediente 1628-2001; y de diecisiete de febrero de dos mil cuatro, dictada en el Expediente 2111-2003). Lo realizado no aparece así en el texto original, pero su utilidad obedece evidenciar la obligatoriedad de ejercitar la facultad de enmienda una vez que se ha determinado un equívoco procedimental, siempre que éste no haya sido tácita o expresamente consentido por las partes en el proceso.

**B.** Lo que posibilita el control del correcto ejercicio de esa facultad (enmienda), o la abstención en cuanto a ejercitar ésta, es la determinación de concurrencia de error sustancial en el procedimiento, y para ello, el criterio jurisprudencial de este tribunal ha sido que se requiere que tal error sea esencialmente relevante, es decir "que pueda incidir en violación de una garantía constitucional" (Sentencias de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, Expediente 697-97 y dos de enero de dos mil tres, Expediente 466-2002). Esto es así porque existen casos en los cuales una autoridad, procediendo de manera arbitrariedad imposibilita el acceso a los recursos pertinentes, tal imposibilidad no puede entenderse como convalidación de actos realizados con evidente violación del principio jurídico del debido proceso.

[...] Lo antes determinado evidencia entonces que la autoridad impugnada, al haber denegado al amparista la solicitud de enmienda de procedimiento resuelta mediante el acto reclamado, si bien hizo uso de la discrecionalidad que la ley le confiere, inadvirtió el error concurrente y denegó su enmienda, que en tales circunstancias, era procedente para reparar un proceder arbitrario.

Por ello es que se estima que para garantizar a la postulante el adecuado goce de su derecho a un debido proceso, resulta procedente el otorgamiento del amparo solicitado (...).

### **Corte de Constitucionalidad**

**Expediente 4184-2011**

**6 de diciembre de 2011**

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20111206-0000-4184-2011>

Esta Corte ha sostenido, en más de tres fallos contestes y consecutivos, que no es apelable la denegatoria de la enmienda del procedimiento, entendida como una facultad discrecional del juez, ya que no está concebida en nuestra legislación como un medio de impugnación o remedio procesal por el que las partes puedan reclamar contra resoluciones y actuaciones procesales (sentencias de seis de marzo, diecisiete de julio y treinta de octubre, todas de dos mil nueve dictadas dentro de los expedientes dos mil ciento seis – dos mil ocho (2106-2008)



mil cincuenta y nueve – dos mil nueve (1059-2009) y dos mil treinta y cinco – dos mil nueve (2035-2009) respectivamente.

De esa cuenta, al tenor del artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el criterio antes relacionado constituye doctrina legal que debe respetarse por los tribunales de la jurisdicción ordinaria.

[...] no puede considerarse que una resolución judicial que determine no realizar un acto que es facultativo, pueda provocar violación a derechos fundamentales, menos constituir extralimitación en la potestad de juzgar y, por lo tanto, no es susceptible de ser impugnada por vía del recurso de apelación. No pueden estimarse producidas dichas transgresiones por el sólo hecho de no haberse acogido la solicitud de que fuera dispuesta la referida enmienda, cuando el decretarla es una decisión discrecional que compete *motu proprio* al juez de la causa. En todo caso, para denunciar y provocar el examen de anomalías procesales que redunden en afectación de los derechos de las partes en litigio, están previstas en la ley las alternativas idóneas para el efecto, los cuales, en algunas situaciones especiales, sí son susceptibles de ser revisadas por vía de la alzada.

En el presente caso, la resolución que declara sin lugar el ocurso de hecho que se instara a efecto de provocar el conocimiento en alzada de una denegatoria de enmienda del procedimiento y que ahora se cuestiona mediante la presente acción de amparo, fue emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil con observancia de la ley, pues este órgano jurisdiccional, al efectuar el análisis de la viabilidad de la apelación, determinó que la resolución impugnada no encuadraba en el supuesto que contempla la literal d) del artículo 67 citado. Por tal razón, el amparo debe ser denegado y, habiendo resuelto en ese sentido el Tribunal de Amparo su fallo debe ser confirmado.

#### **Corte de Constitucionalidad**

**Expediente 2781-2010**

**10 de septiembre de 2010**

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20100910-0000-2781-2010>

En reiteradas oportunidades esta Corte ha esgrimido en sus fallos el criterio de que la enmienda del procedimiento debe ser concebida como una facultad de naturaleza discrecional del juzgador para subsanar, sin depender del impulso procesal de las partes, los actos procesales defectuosos que él mismo haya podido producir en la tramitación del caso, con el propósito de fortalecer su posición como garante del principio de legalidad y de los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso que asisten a los litigantes. Sin embargo, su disposición debe ser consecuencia directa e inequívoca de la circunstancia de que el juzgador advierta la existencia de dichos errores *in procedendo* dentro del conjunto de actuaciones que se encuentran sometidas a su conocimiento, partiendo de la premisa lógica de que es única y exclusivamente con relación a dichas actuaciones que él posee competencia para ejercer la potestad jurisdiccional que le confiere el artículo 203 de la Constitución Política de la República.

En atención a lo señalado, la decisión de disponer o no la enmienda del procedimiento es una facultad del Juez que ejerce en virtud de las potestades que tiene asignadas por la ley. En ese orden de ideas, el proceder de la autoridad impugnada, al dictar la resolución que por este medio se enjuicia, no causó agravio alguno en la esfera de los derechos del amparista. En todo caso, si el postulante se encontraba inconforme con la admisión de la demanda por tener



vicios el título ejecutivo, la enmienda no era el mecanismo para impugnar dicha admisión, pues debió hacer su reclamo directamente en la vía ordinaria, por medio de las excepciones que le otorga la ley.

En casos similares, esta Corte ha pronunciado el criterio expuesto anteriormente en las sentencias de treinta y veintitrés, ambas de julio de dos mil diez y veinticinco de junio de dos mil diez, emitidas dentro de los expedientes dos mil treinta y ocho-dos mil diez (2038-2010), ochocientos ochenta y tres-dos mil diez (883-2010) y mil trece-dos mil diez (1013-2010), respectivamente.

#### **Corte de Constitucionalidad**

##### **Expediente 341-2004**

**29 de abril de 2004**

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:341-2004-0000>

...sin considerar necesario analizar las limitaciones a la procedencia del recurso de apelación en los procedimientos de ejecución en vía de apremio, esta Corte estima que el amparo intentado es notoriamente improcedente, por inexistencia de agravio, toda vez que la autoridad impugnada, al denegar el ocurso de hecho interpuesto, actuó conforme las facultades legales de que se encuentra investida, emitiendo una resolución apegada a Derecho, por cuanto el artículo 67 in fine de la Ley del Organismo Judicial establece que es apelable el auto que disponga la enmienda del procedimiento, no así el que la deniegue. De esa cuenta, y en forma congruente con la naturaleza discrecional de este remedio procesal, únicamente cuando un tribunal acuerda enmendar el procedimiento, las partes tienen la posibilidad de impugnar tal decisión, supuesto en el que no se encuentra la pretensión del accionante (porque su solicitud fue declarada sin lugar).

#### **Corte de Constitucionalidad**

##### **Expediente 464-97**

**30 de septiembre de 1997**

<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:464-97-0000>

...el accionante reclama contra la autoridad impugnada por haber emitido las resoluciones (...) en las que (...) se rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que no admitió la solicitud de enmienda.

(...) Con relación a la impugnación de la resolución de veintiuno de marzo del año en curso, por medio de la cual la autoridad impugnada rechazó el recurso de apelación que el amparista interpuso contra la resolución de doce de marzo del presente año, cabe considerar que la autoridad impugnada fundamentó la denegatoria del recurso en el hecho de que en los procesos de ejecución en la vía de apremio, únicamente es apelable el auto que no admita la vía de apremio y el que apruebe la liquidación, lo cual está regulado en el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil. Consecuentemente al haber hecho uso la autoridad de sus legítimas facultades y aplicado correctamente la ley que rige el acto, no se produjo el agravio denunciado.





**Corte de Constitucionalidad****Expediente 806-2004****1 de junio de 2004**<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:806-2004-0000>

...la base de la impugnación instada tuvo como fundamento el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, norma que en el numeral **d)** establece que “el auto que declara la enmienda del proceso será siempre apelable..” Tomando como base el hecho de que lo pretendido por el amparista al promover el recurso de apelación era lograr la revocación de la resolución por medio de la cual se había declarado improcedente la enmienda del procedimiento, el texto del artículo anteriormente transcrito evidencia que dicha declaración en ningún momento pudo haberse obtenido por medio de la apelación instada con apoyo en el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, por no ser medio idóneo de impugnación, puesto que conforme con el artículo antes relacionado, la denegatoria de la petición de enmienda del procedimiento (como ocurrió en el caso que es antecedente del amparo) no genera la impugnabilidad de la decisión, es decir, contra dicha resolución (la denegatoria de la petición de enmienda del procedimiento) no cabe recurso alguno. Asimismo, esta Corte considera que de conformidad con el artículo 209 del Código Procesal Civil y Mercantil, en este tipo de juicios orales sólo es apelable la sentencia. De ahí que tampoco refleje agravio alguno, el hecho de que no se haya accedido a lo pretendido por el amparista –revocación de la decisión de declarar sin lugar la enmienda del procedimiento, y por ende la anulación de la resolución que señala nueva audiencia dentro del juicio oral de división de la cosa común- contenida en el primer acto reclamado en amparo.

**Corte de Constitucionalidad****Expediente 4734-2011****14 de febrero de 2013**<http://iuristec.com.gt/index.php?title=Sentencia:20130214-0000-4734-2011>

...la postulante endilga agravio al acto reclamado porque la Sala reprochada confirmó la decisión del Juez de primer grado, en cuanto a no admitir para su trámite la ejecución en vía de apremio como consecuencia de haber enmendado el procedimiento al advertir que en el escrito de demanda se incurrió en error. La naturaleza de la decisión impone el análisis de las motivaciones invocadas, tanto por el Juez como por la Sala, para sustentar sus respectivas resoluciones, pero previamente se deben formular algunas consideraciones respecto de la apelabilidad de la resolución por la que se decreta la enmienda en procedimiento en procesos de ejecución singular.

Este Tribunal ha sostenido en anteriores oportunidades, con fundamento en lo prescrito en el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil, que en la ejecución en la vía de apremio el recurso de apelación se encuentra limitado. Con base en esa norma e invocando el principio de especialidad recogido en el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial, ha sentado jurisprudencia en el sentido que en esa clase de procesos el auto que decide la enmienda del procedimiento no es apelable, pues prevalece el precepto referido del Código Procesal Civil y Mercantil sobre el artículo 67 inciso d) de la indicada Ley. Este criterio se encuentra contenido, entre otras, en las sentencias emitidas por esta Corte el doce y veintiséis de septiembre y el tres de octubre, todas de dos mil ocho (expedientes 1837-2008, 2632-2008, 2714-2008 y 1527-2010) y recientemente el veinticinco de febrero de dos mil once (expediente 3356-2010). En fallos recientes este Tribunal ha razonado una variación en su doctrina legal, al estimar que debe prevalecer la disposición de la Ley del Organismo Judicial



frente a la del Código Procesal Civil y Mercantil (véase las sentencias de veintidós de marzo y tres de mayo, ambas de dos mil doce proferidas en los expedientes 600-2011 y 1807-2011).

Sin embargo, en el presente caso no resulta pertinente profundizar al respecto en razón que la enmienda decretada por el Juez provocó la anulación de la resolución que había admitido a trámite la demanda y, al reponer las actuaciones, ésta fue repelida, dando lugar por esa circunstancia a que concurra uno de los supuestos de apelación contemplados en el artículo 325 del precitado Código, conforme al cual *“Solamente podrá deducirse apelación contra el auto que no admita la vía de apremio y contra el que apruebe la liquidación”* (el subrayado es propio). En consecuencia, la viabilidad de aquella impugnación resulta una cuestión fuera de discusión en el presente asunto.

[...] no existe la supuesta incongruencia que invocó el juez para decidir mediante enmienda rechazar a trámite la demanda puesto que, como fue ya señalado, en la demanda la ejecutante especificó que la suma cuyo pago pretendía era la que se debía a septiembre de dos mil dos, lo que apoyó debidamente en la certificación contable que adjuntó en donde consta ese monto, desglosado en capital e intereses al treinta de septiembre de ese año. En el título ejecutivo acompañado para sustentar la ejecución –cédula hipotecaria- consta que la obligación original fue asumida por una suma diferente, por lo que era indispensable que se determinara la obligación pendiente de cumplimiento como consecuencia de la falta de pago de las amortizaciones pactadas, suma que naturalmente debía verse incrementada durante la dilación procesal por los intereses y costas judiciales hasta su efectivo pago. En tal sentido, ninguna incongruencia existe entre lo afirmado en la demanda y lo que consta en los documentos acompañados por la parte que promovió la ejecución en vía de apremio y, de esa cuenta, la decisión de no admitir la demanda en mención deviene contraventora del derecho de defensa y del principio del debido proceso. En efecto, el examen y calificación del título ejecutivo, que es lo que impone al Juez el texto del artículo 297 del Código Procesal Civil y Mercantil, llevo a que originalmente la ejecución fuere admitida a trámite, ello porque si bien en ese documento se consigna una suma diferente a la pretendida, ello encuentra justificación en la circunstancia que la obligación que le da origen fue sujeta a cumplimiento mediante pagos mensuales y consecutivos, respecto de algunos de los cuales los obligados incumplieron dando lugar a que la parte acreedora debiera acreditar el monto efectivamente debido a fecha determinada, incluyendo los intereses respectivos, suma que en forma adecuada fue consignada en la demanda, con la precisión que era el monto a que ascendía el capital e intereses y que sobre tal suma debía oportunamente calcularse los intereses y costas judiciales que siguieran causándose. No hay motivo que justifique que se estimare por el Juez y luego que se confirmare por al Sala reprochada, que entre lo afirmado en la demanda y los documentos adjuntos, en particular la certificación contable que se acompañó, no existía congruencia. En todo caso, la función de tal certificación no es la de suplantar al título ejecutivo, sino de auxiliar de éste en la determinación de la cantidad líquida que se pretende por la entidad actora.

Cabe acotar que en los procesos de ejecución la pretensión no puede fijarse con antelación de manera concreta, pues no será sino hasta que se apruebe la liquidación que quedará establecido en el proceso el monto total de la obligación que se ejecuta. De ello puede colegirse que la carga que tiene el ejecutante en su demanda no es consignar el monto de la obligación, pues normalmente no lo será la cantidad original ni tampoco puede anticipar a que suma arribará la liquidación, como tampoco puede anticipar el tiempo que transcurrirá para que el proceso alcance esa fase, de ahí que en la demanda debe acompañar un título ejecutivo que reúna las condiciones antes detalladas (contener una obligación líquida y exigible). En ese





sentido es pertinente citar lo que al respecto sostiene Chacón Corado: “...En el proceso de ejecución el fundamento de la petición es siempre el título ejecutivo; éste por sí solo establece el hecho relevante para fundar la petición, individualizándola de las demás, no siendo necesario alegar nada distinto. Más aún, el ejecutante no precisará probar nada para que la ejecución se despache y se lleve hasta el final. Si el ejecutado alega algo, sea lo que fuere, a él corresponde la prueba. En el título se resumen todas las alegaciones y pruebas que el ejecutante precisa...” [Procesos de Ejecución, Magna Terra Editores, 2008, pág. 39].

